

## EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano  
Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial

Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino

Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro.

Editor General Jorge Cardona

Vicepresidente Comercial Caracas Unidad de Medios Mauricio Umaña Blanche

123

ERRADICACIÓN  
EN TUMACO

GOVA



## Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fidelcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y Andiarinos  
© Comunican S.A. 2016. Todos los derechos reservados.  
ISSN 0122-2856. Año CXXIX. www.elespectador.com

## Tumaco y el posconflicto violento

**N**O DEBEN PRESENTARSE EXCUSAS ni dilaciones: las autoridades necesitan informarle al país, lo más pronto posible, qué fue lo que sucedió en Tumaco (Nariño) la semana pasada. El enfrentamiento que dejó a seis campesinos muertos y 23 personas heridas, según las cifras oficiales, es un síntoma doloroso de un posconflicto torpe y cada vez más violento. ¿Dónde está el liderazgo para esta etapa de implementación del Acuerdo, tal vez más complicada que la negociación misma?

Los hechos son confusos. La Fuerza Pública dice que una discipencia de las Farc los atacó con cilindros bomba mientras intentaba hacer un ejercicio de erradicación forzada de cultivos de coca. Los disparos, según esa versión, fueron en defensa propia. Sin embargo, hay de por medio civiles muertos y organizaciones de derechos humanos cuestionando la versión oficial. Es cierto que hay motivos para dudar, por lo que se hace urgente una investigación que explique lo ocurrido. No puede quedar en el aire la pregunta por la responsabilidad de esta tragedia.

Dicho lo anterior, es frustrante que estos hechos se sienten como el lógico desenlace en una serie de fallas constantes en este posconflicto. La hoja de coca, unida a la incapacidad del Estado para suplir sus ausencias históricas, están creando violencias angustiantes.

Tumaco tiene 23.148 hectáreas de cultivo de hoja de coca, que representan un 16 % del total del país, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Eso es más de todas las hectáreas cultivadas que hay en Bolivia. Lo que significa que esta es una zona roja por la presencia de narcotraficantes, nuevas bandas criminales y por el interés del Gobierno en reducir esos números de cultivos.

Que lo ocurrido la semana pasada haya sido en el marco de una protesta campesina contra la erradicación forzada dice mucho de los obstáculos para la implementación del punto del Acuerdo relacionado con el narcotráfico. ¿Estamos fallando en la planificación y aplicación de los acuerdos de sustitución? ¿Falla también la manera como se está llevando a cabo la erradicación forzada en comunidades que se niegan a la sustitución? La evidencia nos da una respuesta afirmativa.

No puede crearse una relación de enemistad entre la Fuerza Pública y las poblaciones cocaleras. Por supuesto que los narcotraficantes van a buscar instrumentalizar a

“¿Cómo vamos a lograr que la relación entre la Fuerza Pública y estas personas sea sana, productiva y lleve a una solución pacífica?”

las familias que dependen de la hoja de coca para su sustento, pero eso no les quita su calidad de víctimas. En la disputa entre el Estado y las fuerzas ilegales, de nuevo los ciudadanos (campesinos, en este caso) están en la mitad del fuego, viendo cómo las promesas del posconflicto se frustran por la sangre que llevan tantos años conociendo. La pregunta, entonces, es: ¿cómo vamos a lograr que la relación entre la Fuerza Pública y estas personas sea sana, productiva y lleve a una solución pacífica?

Aquí, por cierto, no pueden lavarse las manos los miembros de las Farc. ¿Qué sucedió con su compromiso, plasmado en el Acuerdo, con la erradicación y sustitución? ¿Qué están haciendo para ayudar en la implementación, en los diálogos con las poblaciones? ¿O están esperando a que ocurran estas tragedias para explotárselas políticamente?

Tristemente, como escribió Alejandro Reyes en El Espectador, el posconflicto colombiano está mediado por la displicencia y la ausencia de un liderazgo evidente. Los resultados, que ya estamos viendo, son nefastos: la misma violencia, pero con distinto nombre. Por las víctimas de Tumaco, por todos los líderes sociales asesinados y por todos los que han sufrido el conflicto, tenemos que reaccionar. Que no se repita la historia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [yosoyespectador@gmail.com](mailto:yosoyespectador@gmail.com)

## La lucha contra la corrupción

SALOMÓN  
KALMANOVITZ

LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA también tiene una raíz cultural. Se trata de la cultura del avivato y del desacato de las normas, en tanto no nos convengan. Los pocos casos de condenas por corrupción siempre se excusan como persecución política. La cultura de la viveza es parte de la herencia colonial, pero se ha fortalecido mucho en tiempos recientes con la captura mafiosa de partes del Estado y el surgimiento del clientelismo mercantil. El recurso a las economías ilegales del narcotráfico y de la minería potencian esta cultura, mientras que hay muchos que encubiertos en la informalidad no pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social.

La corrupción brota cuando funcionarios o políticos cuentan con poder de monopolio sobre contratos y nóminas, pueden decidir discrecionalmente el costo de sus intervenciones y es débil su rendición de cuentas. La opacidad es una condición necesaria para la reproducción de la co-

rrupción, pero también lo es la ausencia de condenas judiciales y de sanción moral que pueden ejercer la opinión pública, los medios de comunicación y, sobre todo, los partidos políticos que, por el contrario, encubren los crímenes de sus asociados.

Los puntos críticos de la corrupción en el país, para el estudio de Dejusticia, son la ausencia de regulación de los partidos, que pueden hacer una sistemática vulneración de las normas electorales y del financiamiento ilegal de sus campañas a través del Consejo Nacional Electoral. Otro punto débil es el Consejo Nacional del Servicio Civil, que permite el nombramiento sin requisitos de la mayor parte de las posiciones de las nóminas nacionales y regionales.

La conjura de la contratación, mediante pliegos sastrer diseñados a la medida de los beneficiarios y de los financistas de las campañas políticas, ha tornado la licitación pública en una burla de la competencia. Eso explica que una parte sustancial de la contratación se vaya en pagar a los corruptos y que la calidad de la obra pública y de los servicios subcontratados sea deplorable. No es accidental que nuestra infraestructura sea tan pobre y que haya costado mucho más que la de otros países vecinos, donde es de excelente calidad.

Los entes de control tienden a actuar en

forma mediática, condenando en público a los inocentes y dejando en la sombra a los culpables; ellos mismos son resultado de intercambios políticos que protegen a los corruptos; no se distinguen por su profesionalismo y menos por su eficiencia. El nombramiento de estos funcionarios lo debe hacer el poder ejecutivo sin transacciones con los partidos políticos ni el Congreso y mediante selección meritocrática.

Otras medidas necesarias para combatir la corrupción saltan a la vista: cortar el vínculo entre intereses privados y públicos en la financiación de las campañas, asumiéndola el gobierno, pero a la vez establecer un cuerpo de aforados independientes que constituya un nuevo Consejo Electoral que juzgue y condene la corrupción.

El informe de Dejusticia pide “identificar las reformas legales necesarias para que los partidos políticos asuman un compromiso mayor en la lucha anticorrupción, en especial a la hora de otorgar los avales para los candidatos de las elecciones locales y departamentales”.

Pero se requiere de una voluntad política con la que no cuenta la mayor parte de los partidos clientelistas, voluntad que sí puede surgir de un frente de centro-izquierda contra la corrupción en las próximas elecciones.

## Nieves



-Lago